



NUE 185-A-2019 (SP)

**Rosales Morales contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)**

**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las catorce horas con veintidós minutos del diez de marzo de dos mil veinte.

**1. Descripción del caso:**

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Genevieve Matilde Rosales Morales**, en adelante la apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**. La información solicitada por la apelante consistente en: "el audio completo de la sesión de Corte Plena del 11 de Julio del 2019".

En fecha 27 de noviembre de 2019, la oficial de información con documento de referencia UAIP/OIR 394/2019, resolvió entregar a la licenciada **Genevieve Matilde Rosales Morales** el comunicado suscrito por la Secretaria General de la CSJ, así como la versión pública del audio de la sesión de Corte Plena de fecha 11/07/2019.

En ese sentido, la apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto, manifestando su inconformidad con dicha resolución, señalando que la misma es en sí era una denegatoria de lo solicitado, bajo la apariencia de la entrega de una versión pública del audio en mención. Asimismo, agregó que, en los registros de audio entregados por el ente obligado, se han suprimido largos lapsos, sin que exista ni justificación ni motivación para ello, puesto que únicamente se hizo mención, tanto en la resolución de la oficial de información como en el memorándum suscrito por la Secretaria General de la CSJ, que se



entregue el audio solicitado en versión pública, lo cual anula la posibilidad de efectividad del derecho de acceso a la información pública.

En complemento de lo anterior, la parte recurrente señaló que la sesión de Corte Plena del 11 de julio de 2019 se dedicó, en esencia, a la conformación de ternas para magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, a proponer por la CSJ, por lo que no existe, en ninguna forma, información que pueda calificarse como confidencial o reservada.

Este Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la LAIP; sin embargo, posterior a acontecer su renuncia, le ha sido reasignado a la Comisionada Presidenta en funciones **Silvia Cristina Pérez Sánchez**. Asimismo, en pleno cumplimiento al derecho de defensa y audiencia de las partes, se solicitó la presentación a la CSJ del informe de justificación del acto impugnado conforme al Art. 88 de la LAIP.

El ente obligado rindió el informe solicitado, por medio de **Eva Marcela Escobar Pérez**, en calidad de apoderada Administrativa con cláusula especial del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en lo medular, afirmó que en la sesión plenaria del 11 de julio de 2019 del citado tribunal colegiado no se abordó solamente la conformación de ternas de candidatos de magistrados al TSE, lo cual puede corroborarse en el proyecto de agenda de dicha sesión, colgada en el portal [www.transparencia.oj.gob.sv/lectura/13832](http://www.transparencia.oj.gob.sv/lectura/13832), en el cual se encuentran VII puntos a conocer.

Seguidamente, **Escobar Pérez** aclara que en acta autorizada en esa misma sesión se aprobó la agenda respecto a tres puntos: i. suplicatorio 75-S-2019. ii. excusa 13- E- 2019. iii. comisión de jueces. Asimismo, la representante del Órgano Judicial alegó como justificante en el presente caso, que uno de los temas conocidos por la Corte Plena el día 11 de septiembre del 2019, tiene declaratoria de reserva vigente a la fecha, refiriéndose al suplicatorio 75-S-2019, constando en el acta autorizada, que se trata de asistencia legal mutua activa en proceso penal seguido contra el ex Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena y otros, dirigida a la República Popular de China, a través de la autoridad central establecida.

Que la correspondiente reserva, fue emitida el 11 de diciembre de 2018 —de la cual se agrega copia simple y se relaciona que la misma es información oficiosa que se encuentra en [www.transparencia.oj.gob.sv/lectura/12602-](http://www.transparencia.oj.gob.sv/lectura/12602-).

Bajo este contexto, el ente obligado afirmó que su actuación es conforme a lo establecido en el art. 30 y 76 inc. 2 de la LAIP, siendo este el motivo por el cual el audio que se entregó a la recurrente, tal como se afirma por la Secretaria General de la CSJ, fue un archivo digital en versión pública, lo cual se deduce el memorándum SG-ER-270-2019, de fecha 26 de julio de 2019, el cual corre agregado al expediente administrativo. Además, existe constancia extendida por la Secretaria General de la CSJ, de fecha 12 de septiembre de 2019, que expresamente detalla los tiempos en los cuales no existe registro de grabación en el audio relativo a la sesión del 11 de julio de 2019, específicamente en el punto de la conformación de las ternas propuestas por la CSJ para integrar el Tribunal Supremo Electoral, y agrega que “no se encendieron los micrófonos y por tanto, los mismos no son productos de alteración, manipulación o edición alguna”. Específicamente, se sostiene que en los intervalos en los cuales no se registra grabación es debido a no haberse activado el microfono.

Que tal actuación se encuentra reglada en el art. 12 inc 1 del Reglamento Interno de la CSJ, que expresamente señala “en la sala de sesiones de la Corte Plena habrá un dictáfono el cual el Presidente o el Magistrado a que se encomiende esta función irá grabando de modo escueto, los acuerdos que se tome”.

Posteriormente, el 20 de enero del presente año, se inició la realización de audiencia oral correspondiente, con la asistencia del apoderado administrativo del Órgano Judicial, **Giovanni Alberto Francisco Marinho Rosales y Rosales Rosagni c/p Giovanni Alberto Rosales Rosagni**, y en representación de la parte apelante, el doctor **Salvador Enrique Anaya Barraza**. Se advierte que previo a dar inicio a la referida audiencia, se dio trámite al incidente planteado por el ente obligado, respecto a la recusación de la Comisionada Presidenta en Funciones, el cual una vez evacuado los traslados correspondientes, el pleno del Instituto con exclusión de la Comisionada Silvia Pérez, resolvió declarar no ha lugar dicha recusación por no haberse acreditado el impedimento alegado. Seguidamente en la fase probatoria, de conformidad a lo establecido en los Arts. 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), se admitió de la prueba ofertada por el apelante, el CD ofertado por la



parte apelante y prueba testimonial consistente en la deposición de la Licenciada María Soledad Rivas de Avendaño, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. Respecto de la prueba ofertada por el ente obligado, se admitió: i. Copia de certificación de punto de acta de sesión de Corte Plena de fecha 10/09/2019; ii. Copia certificada de la constancia emitida por la Secretaria General de la CSJ, de fecha 09 de septiembre de 2019; iii. Disco compacto conteniendo la grabación del audio de la sesión de Corte Plena de fecha 25/06/2019. iv. Copia simple de Acta autorizada número 50 correspondiente a la sesión de Corte Plena de fecha 25 de junio de 2019. Asimismo, se rechazó la prueba consistente en memorándum suscrito por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de julio de 2019, y resolución del 30 de julio del año recién pasado, por ser información contenida en el expediente administrativo del presente caso. Asimismo, se rechazó la realización de peritaje técnico científico, por no coincidir con el objeto de controversia del presente caso.

Después de un incidente interpuesto por el apoderado del ente obligado y que fue declarado sin lugar. Se reanudó la realización de dicha audiencia el día veintiocho 28 de enero de 2019, con la comparecencia adicional a la de los dos intervinientes primigenios de la licenciada Escobar Pérez, iniciando con la deposición de la testigo ofertada por la parte apelante, siendo su comparecencia el motivo de interrupción de la celebración de la misma. Posteriormente, en la fase de alegatos el apoderado de la parte recurrente estableció en lo medular, que el objeto de este procedimiento se configuró sobre la integridad de los registros de la sesión de corte pleno, pues la solicitud de información se hizo presumiendo esa integridad, la cual se entiende que la misma sea completa. Que considera que la forma de grabación de dichas sesiones son jurídicamente inadmisibles, pues es necesario que se “apriete” un botón del micrófono para su grabación. Que considera que ese método de grabación es inconstitucional, porque está condicionado a la disponibilidad del magistrado registrar o no el audio.

Que considera inaudito que en una sesión de más de dos horas de grabación hayan cincuenta y nueve interrupciones de grabación, que incluso la testigo reconoció que este método es un sistema antiguo, el cual considera que es un mecanismo contrario a la Constitución, porque no puede depender del funcionario apretar o no el botón, ello es

contrario al derecho de acceso a la información pública. Que las partes importantes de los debates en el caso solicitado en este procedimiento no están grabadas, lo cual consta en el minuto veintidós de la segunda carpeta de audios y luego en el minuto treinta y dos un magistrado señala “según lo que hemos discutido”, pero de eso no se guardó la grabación. Además, no se sabe el método de selección de los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Que la segunda mejor evaluada por la comisión de jueces para candidatos del Tribunal Supremo Electoral, fue sustituida por el décimo primero, y ese intercambio no se sabe porque se realizó, porque su discusión se dio en los lapsos de silencios, lo cual no permite que la información sea íntegra y completa, esa deficiencia en la grabación del audio, es contraria al principio de fuerza expansiva y optimización de los derechos constitucionales, particularmente del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP). Es más, el art. 3 de la LAIP habla de actualización de recursos electrónicos, lo cual no se da con este sistema antiguo.

Que uno de los principios del DAIP es la integridad y los audios entregados no son completos. Que la base jurídica es el art. 12 del Reglamento Interno de la CSJ, para la grabación escueta, pero esa normativa ha sido superada por la realidad, y derogada por la norma superior y posterior, es decir la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo dicho artículo no se aplica, aclarando la testigo que no es el magistrado presidente el que va grabando, sino un magistrado al que se le asigne.

En conclusión, de acuerdo a la LAIP, solicita se entregue la versión íntegra del audio del 11 de julio de 2019, y además que se le ordene a la CSJ que disponga de un método de registro de audio y de video que garantice el registro completo de la sesión de corte plena.

Por su parte, la representación del ente obligado, señaló en lo medular que no hay que perder de vista el objeto de conocimiento en el escrito de apelación y es sobre los cuales se le ha corrido traslado a la autoridad demandada para pronunciarse, por lo que otros aspectos no deberían ser valorados por este Instituto, porque no se ha permitido a la CSJ manifestarse al respecto. Que para el caso, tanto en el memorándum emitido por la Secretaría



General y en la resolución de la Oficina de Acceso a la Información de la CSJ, se ha confirmado la entrega de una versión pública del audio solicitado.

En tal sentido, señala que las agendas de corte plena son un proyecto y es en la sesión en la que se vota sobre los temas que se conocerán y el orden de los mismos, de conformidad a la atribución dada en la ley de órgano judicial. Que la petición concreta es el audio íntegro de la sesión de Corte Plena del 13 de julio de 2019. Que en tal sesión se trataron tres temas: I. suplicatorio 75-S-2019; II. excusa 13- E- 2019; III. comisión de jueces, donde se abordó las ternas del Tribunal Supremo Electoral. Que la versión pública tiene su razón por el suplicatorio 75-S-2019, el cual es una información reservada por estar en trámite. Que dicha reserva es información oficiosa que puede encontrarse en el Portal de Transparencias de la CSJ. De tal manera que en el audio del 11 de julio se realizó una versión pública de conformidad al art. 30 de la LAIP, es la misma ley que establece el mandato de reservar esos elementos de información pública e información confidencial.

Que por tal motivo, encontrándose vigente dicha reserva la cual se ordenó previo a la presentación de la solicitud de información, es que se ha entregado una versión pública de la sesión de corte plena del 11 de julio de 2019. Que tal circunstancia se verifica en la constancia emitida por la Secretaria General de la CSJ, que corre agregada a fs. 39 del presente expediente, por lo cual no se puede entregar el audio íntegro, porque vulneraría la versión pública, que incluso por ello se puede caer en una infracción muy grave establecida en la LAIP. Que no es viable entregar una versión íntegra de un audio de la sesión del 11 de julio de 2019, por tener una reserva vigente, que no ha sido controvertida por la parte apelante, y que solo ha hecho referencia al tema de las ternas a magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, de donde se puede inferir que su interés era el tercer punto de esa sesión de corte plena.

Asimismo, la apoderada de la CSJ manifestó que todos los funcionarios están regidos por el principio de legalidad (Art. 86 de la Constitución), y sobre la obligación de sus actuaciones estén por escrito, no hay mandato expreso para el órgano judicial como si lo hace la LAIP para la información oficiosa; asimismo, en el caso de la sesión de corte plena, lo que se hace en la actualidad es que se graba la misma, lo que no se registra son los minutos de silencios. Que no hay mandato imperativo para que se realice de otra manera, por lo cual el

reglamento interno se encuentra vigente. Además, no es este el estadio ni la autoridad competente para una inconstitucional, que lo único que se va establecer y conocer es si el audio que se entregó a la ciudadana apelante es conforme a la LAIP.

Se hace hincapié que en el punto tres de la sesión solicitada, se ha entregado de forma íntegra, sobre este punto de la sesión, de manera que sí consta la deliberación de los magistrados, respecto a las ternas no hay vulneración al principio de publicidad y no se ha vulnerado ningún derecho. Que el DAIP tiene un reconocimiento constitucional anclado al art. 6 de la Cn, también la Sala de lo constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, ha establecido que no hay derechos absolutos o resistentes que puedan sobrepasar a otros, y en el caso del DAIP los límites ya están establecidos en la ley, los cuales son la información reservada y confidencial. Que este caso la CSJ ha entregado la información que tiene en su poder, de manera que se entregó audio en versión pública del primer punto de agenda y del tercer punto se entregó una versión íntegra. Que considera que no se puede ordenar la entrega de una versión íntegra de la sesión de Corte en Pleno solicitada, porque además no se ha impugnado la reserva establecida para el primer punto de conocimiento.

Por su parte, la parte apelante, en sus alegatos finales, aseveró en lo medular solicitó *“la entrega íntegra del audio de la sesión de corte plena del 11 de julio de 2019 y se le ordene a la CSJ que garantice la grabación completa de sus sesiones en corte plena”*-sin ser este último punto parte del objeto de controversia puesto en conocimiento en este procedimiento. Que además la información de la agenda de Corte en Pleno y las actas no son públicas porque no están a disposición oportunamente, además la agenda puede ser modificada en la propia sesión de corte plena. Que en el memorándum del 26 de julio de 2019, no se dijo el motivo de reserva, fue hasta este procedimiento que se alegó por la Corte Suprema de Justicia, que el suplicatorio era información reservada, pero ni en el acta ni con la entrega de información se hizo referencia de cuál era la información reservada. Que solicita que se entregue audio íntegro, porque en el acta se refiere que el mismo está aprobado por once votos, no hay nada en trámite.

La apoderada del ente obligado estableció en sus alegatos finales, que ratificaba lo expuesto en el informe de defensa, no siendo el DAIP un derecho absoluto, siendo su límite lo establecido en el art. 19, 24, 30 y 76 de la LAIP. Que además no es autoridad para ordenar



al órgano judicial la modificación de la forma de grabación, porque no es el objeto de esta apelación, y está fuera de sus competencias legales. Por lo que considera impertinente que se imponga a su representada que se adquiriera otro sistema de grabación. Reiterando que el objeto de controversia se limita a establecer si se entregó o no la información que se requirió, pues lo demás no ha sido de conocimiento de este procedimiento. No pudiendo este Instituto ordenar la realización de actuaciones que no le corresponde y que deben estar expresamente establecidas por ley, de conformidad con el Art. 86 Cn. Que la agenda ya estaba publicada previo a la solicitud de información, al igual que el índice de información reservada, por lo cual no hay ocultación de información reservada. Insistiendo respecto del objeto de controversia del presente procedimiento y no de otras peticiones accesorias que se han requerido de forma eventual, de las cuales no se ha pronunciado su representada, debiéndose garantizar su derecho de audiencia y defensa.

A continuación, en la fase de preguntas el apoderado de la parte apelante manifiesto a preguntas del Comisionado Alirio Cornejo, que a su criterio la información entregada no es íntegra en cuanto hay minutos de silencio. Seguidamente a preguntas de la Comisionada Olga Chacón, la apoderada del ente obligado manifestó que de lo entregado al ciudadano consta a fs. 39 documento firmado por la Secretaria General de la CSJ, en la cual se establece el contenido de lo que se ha entregado a la ciudadana peticionante, específicamente señala que el único punto suprimido es el punto uno referente al suplicatorio. Respecto a dicha pregunta el representante de la parte apelante, manifiesta que no se tiene en claridad la parte reservada, lo que si se dan son minutos de silencio.

## **2. Análisis del caso**

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información relativa a: *“el audio completo de la sesión de Corte Plena del 11 de Julio del 2019”*. En ese contexto, el examen del caso seguirá el iter lógico siguiente: (I) Naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito; (II) Cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 30 de la LAIP y del principio de máxima publicidad en la información entregada a la ciudadana apelante; (III) Análisis respecto al efecto que generan reiteradas pausas en las grabaciones de audios o videos que contengan información pública; y, (IV) Atribuciones del Pleno de Comisionados de este Instituto, a fin de verificar su



competencia para recomendar la realización de acciones positivas antes obligados a favor del Derecho de Acceso a la Información Pública.

(I.) En reiteradas líneas resolutivas el pleno de este Instituto ha retomado el concepto de **información pública**, establecido en el artículo 6 literal "a" de la LAIP, entendiéndose por aquella que está en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y **todo tipo de registro** que documente el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio.

Al respecto, dicha definición debe determinarse, pues la misma será utilizada como parámetro de legalidad entre la información que solicitó la ciudadana **Genevieve Matilde Rosales Morales** y la información que se entregó por parte del Órgano Judicial, a efecto de determinar si existe una vulneración al derecho de Acceso a la Información Pública que le asiste a la referida ciudadana, valorando el caso en concreto.

En tal sentido, el derecho de acceso a la información pública, permite al ciudadano **ejercer una labor de fiscalización y contraloría respecto del actuar de la administración pública, en el entendido que su funcionamiento depende de la erogación de fondos públicos** (salarios, emolumentos u otras prestaciones), lo cual ha sido previamente establecido por este Instituto, en el caso con referencia 103-A-2015 de fecha 11 de agosto de 2015, en el cual se afirmó: "el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado". Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el Gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Ahora bien, este DAIP tiene como principio rector el de Máxima Publicidad (art. 4 letra "a" y 5 de la LAIP), que implica que el acceso a la información pública debe estar



sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, por lo que toda decisión desfavorable debe estar debidamente motivada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos<sup>1</sup> ha señalado que: “La importancia del acceso a la información pública conlleva que el **secretismo solo sea aceptado “en casos muy excepcionales, cuando la confidencialidad puede ser fundamental”** para la eficacia de las labores gubernamentales [...]. De lo contrario, se crea un campo fértil para que el Estado actúe de forma discrecional y arbitraria en la declaración de la información como secreta, reservada o confidencial”.

Acorde al párrafo precedente, este Instituto ha establecido<sup>2</sup> que el Derecho de Acceso a la Información no es ilimitado, siendo su reserva la excepción que debe fundarse en una disposición legal anterior, de interpretación restringida, que especifique el tipo de información, la duración de la restricción y que además sea conforme a la Constitución de la República.

Para este análisis, es dable traer a colación la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional respecto al DAIP, estableciendo que “*...De conformidad con los arts. 2 y 3 LAIP, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna, con el objeto de propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los entes obligados, impulsar la rendición de cuentas de las instituciones públicas y promover la participación ciudadana en el control y fiscalización del ejercicio de la función pública, entre otros objetivos. Para tales fines, se ha previsto que la información pública debe ser de acceso irrestricto, salvo las excepciones que prevé la citada ley.*” **negrita suplidas** (Sentencia emitida a las diez horas con treinta y tres minutos del día doce de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente con referencia 35-2016 Inconstitucionalidad).

---

<sup>1</sup> Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 2019; pág. 91

<sup>2</sup> Resolución Definitiva emitida el 23 de octubre de 2013, dentro del expediente con referencia NUE 36-A-2013.

Respecto a este control ciudadano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el Derecho de Acceso a la Información Pública *es una herramienta fundamental para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia, permitir el debate público y facilitar acciones ciudadanas para cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento adecuados a las funciones públicas* <sup>3</sup>(itálica y negritas propias).

Entonces, bajo este parámetro, en el presente caso se ha solicitado: “*el audio completo de la sesión de Corte Plena del 11 de Julio del 2019*”, habiéndose establecido con la prueba documental que corre agregada al expediente que en dicha sesión de Corte Plena se conocieron de tres puntos: i. Supplicatorio 75-S-2019. ii. Excusa 13- E- 2019. iii. Comisión de Jueces (Conformación de Ternas para Magistrados Propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral). Es decir, en el contenido de dicho audio se encuentra el registro del ejercicio deliberativo y de toma de decisiones que realiza la Corte en Pleno de la CSJ dentro de sus facultades legales y constitucionales, de conformidad a lo establecido en los arts. 182 y 208 de la Constitución de la República (Cn.).

Asimismo, el formato de resguardo de dicha información deviene del contenido del Art. 12 del Reglamento Interno de la CSJ, en consecuencia, se tiene por establecido que la información requerida por la parte apelante en el presente caso efectivamente constituye información pública (Arts. 2, 4 letras a y 6 letra c de la LAIP), que se encuentra en poder del Órgano Judicial y por tanto procede verificar si con la entrega de la misma se ha garantizado el principio de máxima divulgación.

(II.) Es así, que al verificar el contenido del expediente administrativo con referencia 452-2019, a folios 11 corre agregado memorándum de fecha **26 de julio de 2019**, suscrito por la Licenciada María Soledad Rivas de Avendaño, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual remite a la oficial de información de la CSJ: Audio de la sesión de Corte Plena de fecha 11 de julio de 2019, en “versión pública”, de conformidad a lo establecido en el Art. 30 de la LAIP, y en auto posterior de fecha **30 de**

<sup>3</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia emitida el 19 de septiembre de 2006, dentro del caso Claude Reyes y Otros vrs Chile.



**julio de 2019**, se emitió resolución, por la Unidad de Acceso a la Información del Órgano Judicial, en el cual se ordena la entrega a la ciudadana **Genevieve Matilde Rosales Morales**, de lo comunicado de la Secretaría General de la CSJ, así como la referida versión pública del audio requerido en el presente caso.

Sin embargo, al revisar por este Pleno, el contenido del referido memorándum y del CD ofertado tanto por la parte apelante como de la representación del ente obligado, no se logra identificar la razón que exprese la supresión efectuada, no obstante establecer el Art. 30 de la LAIP que la interrupción de la información no es automática, debiendo dejar constancia precisa de la misma.

Lo anterior, es una expresión del principio de máxima publicidad de la que goza la información pública, siendo la publicidad la regla y su restricción la excepción, pues implica facilitar su acceso vedando únicamente la información confidencial o reservada que puede estar a disposición del público, siendo de gran importancia la determinación del tipo de información a la que se restringe a fin de no existir confusión o una interpretación inadecuada al DAIP, como es el caso en estudio, en el que no se le informó a la ciudadana requirente el tipo de información que se vetó.

(III.) Aunado a lo anterior, en los CD entregados existen prolongados minutos de silencios que no queda claro si son parte de la “versión pública” o si existe algún motivo técnico por el cual existen dichos lapsos de tiempo. Ante lo cual, resulta imprescindible la valoración del testimonio emitido por **María Soledad Rivas de Avendaño**, Secretaria General de la CSJ, quien ostenta la función de resguardo de dichos registros, considerando que existe acta suscrita por su persona, de fecha **12 de septiembre de 2019**, en la cual se determina el tiempo que constituyen dichos minutos de silencios—la cual no consta en el expediente administrativo y que tampoco se le entregó oportunamente a la ciudadana solicitante—

Es así que **Rivas de Avendaño** afirmó que en Secretaría General se custodia la llave de acceso a dicha oficina donde está el *hardware*, en el cual se graba las sesiones en un disco en vivo. Que las sesiones se graban en CD de ochenta minutos cada uno y de forma inmediata y sin interrupción se registra audio con las voces de los micrófonos que se guardan en cada

sesión de Corte en Pleno. La testigo manifestó que el sonido guarda únicamente lo vinculado al micrófono que está conectado en línea y que se agrega solo un micrófono inalámbrico cuando llega un segundo visitante. Asimismo, señaló que el sonido está conectado a un sistema de micrófonos y para los expositores hay un micrófono asignado y solo en un grupo mayor se conectan inalámbricos que se relacionan para la grabación. Que para que se guarde la voz en el sistema de audio es necesario que se encienda el micrófono para que se grave en el CD en vivo.

En este escenario, habiéndose establecido que en principio las discusiones, deliberaciones y decisiones tomadas por la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia son información pública, al constituirse dentro del ejercicio de sus funciones constitucionalmente establecidas -en particular la selección de los integrantes que formarán la terna a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral- y que las mismas se encuentran contenidas en un soporte electrónico por las grabaciones de voz que se realiza de las mismas, es válido preguntarse ¿Bajo qué fundamento legal o constitucional se realiza la selectividad de la información que se guarda en el soporte de audio previamente establecido?

Los argumentos de los representantes del Órgano Judicial se basan en el Art. 12 del Reglamento Interno del Órgano Judicial<sup>4</sup>, que literalmente establece: *"En la Sala de sesiones de la Corte Plena habrá un dictáfono en el cual el Presidente o el Magistrado a quien se encomiende esta función irá grabando el modo escueto, los acuerdos que se tome. Posteriormente, un empleado del Tribunal sacará versión mecanográfica de los acuerdos tomados. Esta versión, después de revisada y corregida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y rubricada por éste en todas sus páginas, pasará a la Secretaría del Tribunal para que los acuerdos sean consignados en el libro respectivo y cumplidos en la forma conveniente"*. (cursivas y negritas suplidas)

Al realizar una lectura literal de la referida norma, parecería que la obligación de su resguardo está limitada a los "acuerdos que se tomen", pues eso serviría de base al

<sup>4</sup> Reglamento Interno del Órgano Judicial, aprobado el 3 de junio de 1968 y publicado en el Diario Oficial N° 126, Tomo 220, del 8 de julio de 1968.



levantamiento posterior del acta correspondiente que queda asentada en el Libro de Acuerdos; sin embargo, a preguntas aclaratorias realizadas por el Pleno de este Instituto, la testigo refirió que también las “*deliberaciones forman parte del registro de grabación*”, por cuanto, es necesario realizar un análisis de interpretación por integración de todos los elementos a efecto de esbozar una postura, valorando que en su forma de resguardo se está realizado de forma parcializada, debiendo considerar para dicha acción el respeto del DAIP.

Debe reiterarse que el contenido de tales deliberaciones y decisiones tomadas en Corte Plena están dotadas de gran relevancia e interés público al estar relacionadas al quehacer de todo un Órgano del Estado, y la forma en que se toman las decisiones, debiendo reconocerse que para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones públicas se requiere ineludiblemente de una deliberación. Al respecto, en este caso al haberse establecido que no se cuenta con el audio íntegro de la deliberación y discusión realizada para la selección de las personas que formarán las ternas a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, consideramos que no se puede tener por cumplido el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública.

Que el hecho de realizar una grabación con largos minutos de silencios, puede prestarse a una interpretación errónea o de generar la impresión que se pretende favorecer a algún candidato con una actuación arbitraria en la reserva de hecho de la información pública solicitada, y que esa restricción de acceso no esté dentro de las excepciones establecidas por ley (información confidencial o reservada), no dándole la oportunidad a un ciudadano, que conozca la forma y sobre todo los criterios objetivos y de mérito que llevaron a un órgano para elegir la terna de alguien que será electo funcionario *a posteriori*.

Entonces, debe establecerse que al existir un soporte técnico de las discusiones realizadas por la Corte en Pleno de la CSJ, esta debe llevar una finalidad integral, para seguir una lógica conforme a la cultura de transparencia y rendición de cuentas, y por lo tanto, el respaldo debe ser íntegro de forma tal que se facilite el acceso completo de la información pública a la que se tiene derecho, de conformidad a lo establecido en los arts. 2 y 6 de la Cn., 13 de la Convención Americana y Art. III numeral 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esto contribuye a la democratización de un Estado de Derecho y evitar discrecionalidades en el ejercicio de sus funciones.

Respecto al DAIP, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el mismo *genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos[...]* En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” precisa, en su principio 2, que “el derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas”.

[...] En este sentido, la resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” del Comité Jurídico Interamericano indica que el derecho de acceso a la información, “se refiere a toda la información significativa, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio”<sup>5</sup> (itálica y negritas suplidas).

Bajo este contexto, en el caso en discusión, la oficial de información del órgano judicial entregó a la ciudadana requirente un CD que contiene tres carpetas, presuntamente con la información que contiene la versión pública del audio de la sesión de Corte Plena de fecha 11 de julio de 2019; sin embargo, con lo relacionado previamente se tiene por establecido que no se han cumplido con los requisitos del art. 30 de la LAIP y que tampoco tiene en su poder la CSJ, respaldo completo de dicha sesión, por el formato en el cual se resguarda la misma, por lo cual es pertinente ordenar la entrega en legal forma de la información con la que se cuenta, es decir, colocando la razón de la información que se ha suprimido y el motivo de la misma.

<sup>5</sup> El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre 2009, pág. 6.



Que respecto a contar con información completa, respecto a la deliberación correspondiente para motivar y fundamentar la escogitación de los integrantes a las ternas de Propietarios y Suplentes de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la cual es de gran interés público -como se ha advertido previamente-, es pertinente ordenar a la Corte en Pleno la reconstrucción de tal deliberación, la cual deberá proporcionarle a la Ciudadana apelante en el presente caso, valorando los prolongados minutos de silencios en la grabación de la sesión de Corte en Pleno del 11 de julio de 2019.

(IV.) Ahora bien, es importante retomar que el Art. 58 de la LAIP, faculta al Pleno de Comisionados de este Instituto para velar por la correcta interpretación y aplicación de esta norma, pudiendo recomendar acciones para promover en los entes obligados una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Es así que consideramos que existe posibilidad por parte del Órgano Judicial de realizar la grabación completa de las discusiones y deliberaciones realizadas para la toma una decisión acordada en las sesiones de Corte en Pleno, siendo los únicos límites legales para su divulgación la información confidencial o reservada.

Que este recomendable no es contrario al principio de legalidad, pues desde que los funcionarios públicos realizan su juramentación para el ejercicio de su cargo, están en la obligación de cumplir todos los deberes que su cargo les impone (art. 235 de la Cn.) y en consecuencia, sujetos a la rendición de cuentas correspondiente, por la toma de decisiones que realizan.

Asimismo, la completa grabación de dichas sesiones evitará malos entendidos en la conservación y entrega de información, en el sentido que al no existir minutos de silencios tan prolongados no se pondría en duda su integridad, aunado a la buena administración del talento humano con el que cuenta dicha institución, pues el tiempo que se tarda en determinar y establecer los minutos de silencio de cada audio, se podría utilizar en otra actividad que también están dentro de sus funciones.

Finalmente consideramos que esta acción no transgrede derechos constitucionales de debido proceso, defensa o igualdad procesal, pues su cumplimiento dependerá de la decisión del ente obligado, quien deberá valorar que a todas luces un audio integró potencia más



derechos y no los restringe, pues no se requiere la compra de otro mecanismo de grabación, ni la contratación de más personal técnico, y menos el uso recursos distintos al que se ya se utiliza para su resguardo, pues en lugar de resguardar CD's que contengan tiempos prolongados de silencios, en los mismos constará información de gran interés público.

### 3. Otras consideraciones.

A. Se ha advertido de la prueba documental y de los audios ofertados en el presente caso, que el ciudadano **Giovanni Alberto Francisco Marinho Rosales y Rosales Rosagni** era parte de los postulantes a participar en la terna de candidatos a Magistrado del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente el mismo se ha mostrado parte en el presente procedimiento en representación del Órgano Judicial, no obstante estar en discusión dicho proceso de selección.

En tal sentido, el Art. 6 Literal g) de la Ley Etica Gubernamental señala que existe prohibición ética de: *Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública (negritas e itálica suplidas).*

Bajo estos elementos, es pertinente informar al Tribunal de Ética Gubernamental de la actuación de **Giovanni Alberto Francisco Marinho Rosales y Rosales Rosagni**, a fin de que se verifique la legalidad de su actuar, conforme a dicha normativa.

B. Por otra parte, habiendo presentado la ciudadana apelante escrito de fecha 4 de febrero de 2020, por medio del cual solicita se le proporcione copia del registro de audiencia oral del presente procedimiento, la cual se llevó a cabo en dos sesiones, realizadas el 21 y el 28 de enero de 2020, es pertinente acceder a lo solicitado, de conformidad a lo establecido en el Art. 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública en relación al Art. 16 numeral 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el cual se establece como derecho de las personas en sus relaciones con la administración pública, que debe garantizarles el poder tener acceso a la información y registros, así como al expediente administrativo correspondiente.

**Decisión del caso:**



Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 48, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) **Modificar** la resolución de la oficial de información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de fecha 30 de julio de 2019, respecto a la información requerida por la ciudadana **Genevieve Matilde Rosales Morales**, consistente en: audio de la sesión de Corte Plena de fecha 11 de julio de 2019, en el sentido que se ordena la entrega del mismo en el plazo de **cinco días hábiles**, y en caso de entregarse en versión pública, deberá realizarse conforme a lo establecido en el art. 30 de la LAIP, es decir, **dejando constancia en una nota la razón de la supresión efectuada.**

b) **Requerir** a la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través de su titular, que en el plazo máximo de **treinta días**, realice la reconstrucción de la deliberación y motivación que llevó a la selección de los integrantes de las ternas a Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, debiendo entregarse tal deliberación a la ciudadana apelante, al cumplimiento de dicho plazo.

c) **Recomendar** al Órgano Judicial que valore la posibilidad de adecuar la forma de resguardo de los audios que contienen las discusiones, deliberaciones y toma de decisiones en las sesiones de corte plena, en el sentido, de no gravar parcialmente las mismas, sino que a efecto de realizar de mejor manera la maximización de recursos, se garantice el resguardo íntegro de dicha información, ya que los audios son considerados archivos que deben ser parte de la gestión documental que debe tener la CSJ, a efecto de garantizar la transparencia de sus decisiones en el ejercicio de sus funciones.

d) **Ordenar** a la Corte Suprema de Justicia que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento de los plazos anteriores, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en los literales a) y b) de esta parte resolutive, la cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada a la apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv.**

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, pues con dicha resolución agota la vía administrativa de conformidad con el Art. 131 de la LPA, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

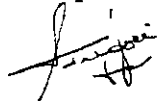
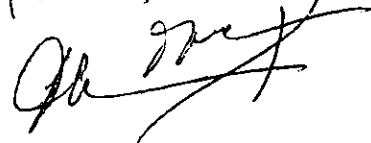
g) **Informar** al Tribunal de Ética Gubernamental respecto al actuar del ciudadano **Giovanni Alberto Francisco Marinho Rosales y Rosales Rosagni**, a fin de verificar la legalidad de su actuar, es decir si la misma ha sido conforme a lo establecido por la Ley de Ética Gubernamental.

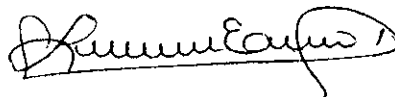
h) **Tener por recibido** el escrito presentado por la ciudadana **Genevieve Matilde Rosales Morales**.

i) **Ordenar** la entrega de copia del video de audiencia oral realizada en el presente caso, en las fechas 21 y 28 de enero de 2020, a la ciudadana **Genevieve Matilde Rosales Morales**, por cuanto al momento de su notificación podrá retirar dicha información.

j) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese. -

F   




**PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.**

sd/cc

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diez días del mes de agosto de dos mil veinte.

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

